

**Asunto:**

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Exención. Artículo 20 inc. f). FUNDACION X.X.

**Voces:**

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - EXENCIONES IMPOSITIVAS - ENTIDADES DE BIEN PUBLICO - FUNDACIONES - REALIDAD ECONOMICA - ANIMO DE LUCRO - INTERMEDIACION FINANCIERA - PERSONAS JURÍDICAS - PATRIMONIO - FIN DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA - DESTINO DE LOS FONDOS

**Sumario:**

I- Del estatuto de la entidad del asunto surgen insuficiencias en las previsiones relativas al destino de los bienes, al no especificar que la entidad a la cual pasarán aquéllos en caso de disolución sea una entidad exenta reconocida por esta Dirección.

II- De la valoración de la realidad económica del ente, surge que la operatoria crediticia que realiza evidencia una actividad financiera con características lucrativas y comerciales.

III- En virtud de estas consideraciones, no corresponde el reconocimiento de la exención al Impuesto a las Ganancias solicitada.

**Texto:**

I. Las presentes actuaciones fueron remitidas por la Dirección de Zona ... en consulta, a fin de que este servicio jurídico se pronuncie acerca de la inclusión de la rubrada en el supuesto de exención dispuesto en el artículo 20, inciso f), de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1986 y sus modificaciones).

Cabe señalar que con fecha 6-10-95, la contribuyente interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 74 del Decreto N° 1397/79 contra la resolución de fecha 13-9-95 de la División ... mediante la cual no se hizo lugar a la solicitud de exención que formulara.

Asimismo, se deja constancia de que la contribuyente interpuso pedido de pronto despacho el día 25-10-95.

Se destaca que la Zona remitente centra la consulta en si la actividad de la rubrada "destinada a conceder préstamos a grupos de microempresarios de escasos recursos, constituidos en deudores solidarios, y mediante el cobro de un interés financiero del 5% mensual, puede interpretarse que está destinada al bien público".

Cabe señalar, que a fojas ... corre agregado informe proveniente de la Región .. de fecha 29-11-95, en el que se concluyó que "si bien estamos en presencia de una entidad que cumple formalmente con los recaudos establecidos en el artículo 20 inc.f) de la Ley del Impuesto a las Ganancias, la realidad de los hechos demuestra una actividad financiera reconocida, que recupera en forma rápida los costos de organización incurridos. Por otra parte si bien los préstamos son de bajo monto y realizados a personas de escasos recursos cabe preguntarse si ello habilita a pensar que se está frente a una entidad de bien público", agregando que "en definitiva el crédito es para desarrollar una actividad económica y lucrativa por parte de los microempresarios".

II. En primer lugar cabe efectuar un análisis del aspecto fáctico y normativo que hace a la cuestión planteada.

Cabe señalar que el inciso f) del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto en 1986 y sus modificaciones) exceptúa de dicho gravamen a "las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones, y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física e intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente entre los socios."

Según surge del estatuto agregado a las presentes actuaciones, la entidad constituye una fundación sin fines de lucro que tiene por objeto -entre otros- proveer el financiamiento para la ejecución de proyectos y programas de desarrollo social y para el desenvolvimiento de microempresas, "proporcionando asistencia económica y técnica al mayor número posible de personas de escasos recursos dentro del territorio nacional, por medio de inversiones recuperables y otras" (cfr. inciso c) del artículo 2º).

Asimismo, surge que todos los beneficios y lucros obtenidos sólo podrán tener como destino su utilización a los fines propuestos en el artículo 2º y que en caso de disolución, una vez pagadas todas las deudas de la fundación, el remanente de los bienes se destinará a una entidad de bien común sin fines de lucro, con personería jurídica y con domicilio en el país y que esté exenta del pago de todo impuesto en el orden nacional, provincial y municipal.

En este aspecto, cabe destacar que mediante la Instrucción N°... (DPNF) del 30/08/72 se dispuso que "En los estatutos debe figurar como requisito indispensable para que la exención prospere, que en caso de disolución de la entidad los bienes que integran el patrimonio deben pasar a otra entidad exenta reconocida por la Dirección General Impositiva o a poder de la Nación, Provincias y Municipios".

Sin embargo, la Instrucción N°...(DPNF) del 29/5/73 modificó este requisito cuando se tratara de personas jurídicas, en cuyo caso "no es obstáculo para el reconocimiento de la exención, el silencio de los estatutos sobre el destino de los bienes en caso de disolución, por cuanto es de aplicación, en tal supuesto, el artículo 50 del Código Civil".

De las presentes actuaciones surge que la rubrada fue constituida con fecha 7-4-92 y reconocida como persona jurídica por la Inspección General de Justicia el 30-4-92, por lo que en principio no necesitaba previsión alguna sobre el destino de los fondos a efectos de acceder al reconocimiento de la exención solicitada.

No obstante, cabe resaltar que esta área asesora ha dicho "... al contener el Estatuto disposiciones al respecto, no puede aplicarse el mencionado artículo 50 que solo juega en caso de silencio, por lo tanto, entiende este Servicio Jurídico que el Estatuto debe especificar que la entidad a la cual pasarán los bienes en caso de disolución es una entidad exenta 'reconocida' por la Dirección General Impositiva", tal como se concluyera en el asunto "IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Exención. H.H., FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE INVERSION PRIVADA PARA EL DESARROLLO." Acts. Nros. ... (DAL), conformado mediante Nota N° ... (DAL).



En virtud de lo expuesto y atento a que del estatuto surgen insuficiencias en las previsiones relativas al destino de los bienes, al no especificar que la entidad a la cual pasarán aquellos en caso de disolución sea una entidad exenta reconocida por esta Dirección, no corresponde el reconocimiento de la exención solicitada.

III. Sin perjuicio de lo dicho, a los efectos de un análisis cabal de la cuestión planteada cabe efectuar ciertas precisiones.

De la confrontación del objeto social de la entidad y de las actividades enumeradas en el inciso f) del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias antes transcrito, parecería que la misma no reúne los extremos exigidos para la procedencia de la exención; sin embargo, cabe destacar que la Resolución General N° 1432, estableció ciertas pautas de interpretación para el caso de que la actividad de la entidad no se encuentre expresamente indicada en dicho inciso.

En primer lugar de sus considerandos se desprende que la enumeración del mencionado artículo no es de carácter taxativo, siendo su sentido el de explicitar el concepto de "beneficio público" por vía ejemplificativa, aclarando que "aun cuando los objetivos societarios de la asociación o entidad civil no sean de aquellos expresamente mencionados, igualmente estará alcanzado por la exención si sus fines específicos tienden al bien público".

Distingue los conceptos de "utilidad pública" y "beneficio público" relacionando a éste con "el propósito de alcanzar una finalidad socialmente útil", siendo indiferente a tales efectos, que se limiten los beneficios a los asociados o se extiendan a terceros.

En su noveno considerando expresa que al hablar de exclusión total de fines lucrativos para la procedencia de la exención, "este concepto no niega la posibilidad de toda ventaja que pueda tener alguna significación económica para los asociados, ya que las entidades de este género se constituyen las más de las veces con el objeto de posibilitar medios fuera del alcance del individuo aislado o de una onerosidad no acorde con sus posibilidades económicas (organización de bibliotecas, reunión de material de estudio, científico, asistencia recíproca, concentración de elementos para exhibiciones culturales o artísticas, etc.)".

Del análisis de dicha norma, la doctrina ha dicho que tanto sus fundamentos como la parte resolutive "llevan a la conclusión de que cualquier tipo de asociación y entidad civil que no persiga finalidad lucrativa utilitaria para sus asociados, se proponga el bien común, al no atentar contra la moral, las buenas costumbres y el orden público, se encontrará perfectamente encuadrada dentro de la norma del art.20, inc.f, de la ley del impuesto a las ganancias." (cfr. C.M. GIULIANI FONROUGE - S.C. NAVARRINE. IMPUESTO A LAS GANANCIAS. DE PALMA. Segunda edición. 1980 -p g. 231).

Es decir que dentro de las pautas de interpretación establecida por dicha resolución general -en especial del concepto amplio de "beneficio público" que surge de la misma- podría llegar a inferirse que la entidad no estaría excluida de la exención del artículo 20, inc.f).

Sin embargo, cabe destacar lo expresado en el asunto "Impuesto a las Ganancias. Solicitud de Exención. Artículo 20, inciso f) de la Ley de Ganancias. A.C.C.T.A. Acts. Nros. ... (DAL)", conformado mediante Nota N° ... (DAL), en cuanto a que a los efectos de otorgar un reconocimiento de exención, no es suficiente el análisis puramente jurídico-formal del caso, sino que necesariamente debe integrarse con una valoración de su realidad económica. Agrega asimismo que "si bien los conceptos jurídicos empleados por la Resolución General N° 1432 dan un marco de interpretación sumamente amplio, es la propia norma la que lo restringe por medio de su artículo 2º, que indica que esa actividad interpretativa debe llevarse a cabo a la luz del principio de realidad económica legislado por el artículo 12 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, y es por ello que no puede reconocerse la exención a quien debió adoptar una figura asociativa más adecuada".

En ese orden de ideas, cabe destacar que de las presentes actuaciones surge una operatoria con determinadas características: la entidad suscribe con los microempresarios de escasos recursos contratos de créditos con tasas de interés de un 5% mensual obteniendo préstamos de entidades bancarias a una tasa de hasta un 16% anual y algunos sin interés; presenta altos costos organizativos y de sistemas; rápido recupero de los gastos y del dinero prestado; como así también la posibilidad de celebrar contratos con personas jurídicas extranjeras -provocando transferencias de ingresos a fiscos extranjeros-, abrir cuentas corrientes con bancos o entidades financieras extranjeras y realizar operaciones de comercio exterior.

Tal descripción trasluce toda una actividad crediticia en la cual la entidad, lejos de tener un espíritu altruista -característica esencial de las fundaciones-, denota una operatoria en la que se toman todos los recaudos necesarios tendientes a resguardar de eventuales riesgos la actividad emprendida por encima de su finalidad de beneficiar a la comunidad.

Por ello, se coincide con lo manifestado por la Región N° ... a fojas ... en cuanto a que "la Fundación, que nos ocupa, asume en definitiva un rol nexo entre los Bancos y los microempresarios.

Habiendo si se quiere, efectuado un análisis de la situación del mercado a fin de cubrir necesidades de un sector, como haría cualquier empresario, cubriéndose del riesgo inherente a la actividad financiera, obligando a asumir la garantía en grupo de microempresarios; que si bien estos no constituyen asociados de la fundación los escasos recursos de que disponen, no habilitan, a juicio de esta área, a pensar que puede interpretarse como bien público la actividad llevada a cabo por la entidad".

No es suficiente que los destinatarios de esa finalidad socialmente útil carezcan de recursos, sino que es requisito que la benefactora esté caracterizada por una actividad en cierta forma desinteresada que la diferencie de cualquier otra empresa con fines comerciales o interesados.

El beneficio que obtienen de la entidad los microempresarios es el de obtener el dinero en préstamo para realizar una actividad económica y lucrativa, con la característica -entre otras- de que dichos contratos de préstamo establecen la caducidad automática en caso de mora por parte del deudor, como así también la posibilidad de exigir intereses punitivos equivalentes al 200% de los intereses resarcitorios convenidos.

Asimismo, cabe agregar que la entidad argumenta que su finalidad socialmente útil se origina en la imposibilidad actual que tienen los microempresarios de recurrir a otras entidades financieras para solicitar sus créditos, circunstancia la cual parecería limitar temporalmente su objetivo ya que en caso de existir un cambio en la política crediticia por parte de las entidades financieras de plaza el mismo se tornaría abstracto.



Por otra parte, dicha circunstancia fáctica podría interpretarse, tal como lo manifestara la Región N°... en el informe antes mencionado, como una situación ventajosa económicamente que ha encontrado la entidad para otorgar préstamos a determinadas personas.

IV. En virtud de lo recién expuesto, como así también de los informes provenientes de la Región N° ... y la de División ... (cfr.fojas ...), surge que la forma jurídica adoptada no es la adecuada en relación a su objeto, ya que se trata en definitiva de una entidad que ejerce una actividad financiera la cual no se caracteriza por una finalidad netamente altruista, sino por el contrario por toda una operatoria crediticia dirigida a un determinado sector de la población en la que, como cualquier entidad financiera, se prevén todos los recaudos a fin de que dicha actividad resulte lucrativa.

Ello lleva a inferir que si bien del estatuto de la entidad surge que tiene una finalidad de bien público, de acuerdo al concepto amplio que surge de la Resolución General N° 1432, de la valoración de su actividad se desprende una divergencia entre los fines establecidos en dicho documento y la realidad económica, teniendo prevalencia ésta sobre aquellos, "conforme a los principios de interpretación económica que rigen la ley fiscal". (cfr. "IMPUESTO A LAS GANANCIAS- Enrique J. REIG- EDICIONES MACCHI- Ed. 1992- pág.228).

V. Por lo expuesto, se concluye que:

1) Del estatuto de la entidad surgen insuficiencias en las previsiones relativas al destino de los bienes en caso de disolución.

2) De la valoración de la realidad económica de la entidad -dentro del marco legal dispuesto por el artículo 2° de la Resolución General N° 1432- surge que la operatoria crediticia que realiza no revela una vocación desinteresada de beneficiar a la comunidad, sino que por el contrario, se evidencia una actividad financiera con todos los rasgos que la caracterizan como actividad lucrativa y comercial, no encontrándose, por lo tanto, incluida dentro de la exención dispuesta en el artículo 20, inciso f), de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1986 y sus modificaciones).

**Publicacion Oficial:**

Boletín DGI N° 520 Abril de 1997

Carpeta N° 18 Página 233

**Referencias Normativas:**

[LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS](#), Artículo N° 20 (Inciso f) )

[LEY DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO](#), Artículo N° 12

[RG DGI N° 1432/1971](#), Artículo N° 2

[DECRETO N° 1397/1979](#), Artículo N° 74

[CODIGO CIVIL \(1869\)](#), Artículo N° 50

**Antecedentes:**

VER: Giuliani Fonrouge; Navarrine, "Impuesto a las Ganancias" Editorial Depalma, 2° Edición, 1980, página 231.

VER: Enrique Reig: "Impuesto a las Ganancias". Ediciones Macchi Ed. 1992, página 228.

**Firmantes:**

DARIO GONZALEZ

Jefe Interino

Departamento Asesoría Legal Tributaria

CONFORME: 29/5/96 JUAN BAUTISTA THORNE

Director Dirección de Asesoría Legal

CONFORME: 26/6/96 ALBERTO MARTIN GOROSITO

Subdirector General Subdirección General de Legal Tributaria